

Neoliberalismo autoritario en el Uruguay: peculiaridades internas e impulsos externos

DANILO ASTORI

LAS COSAS EN SU LUGAR

En un país como el Uruguay, cuya historia muestra inequívocamente la permanente incidencia de factores externos en su proceso económico, al tiempo que este último no puede ser entendido en sus raíces más profundas si no es a la luz de las importantes peculiaridades locales —que lo distinguen nítidamente de otras realidades, incluyendo las latinoamericanas—, ninguna situación puede ser explicada a partir solamente de los factores externos referidos o bien de las peculiaridades aludidas. Por el contrario, es sólo sobre la base del tipo específico de interacción que se ha dado entre ambos que se puede intentar una interpretación rigurosa de lo que ocurre en el país. De esta manera, no es conducente explicar todo lo que ha pasado diciendo que el Uruguay es un país subordinado al exterior, ni tampoco llegaremos a una explicación correcta de los problemas olvidándonos de esa condición de dependencia y concentrándonos en la observación aislada del proceso interno. Lo que tenemos que tratar de percibir con toda claridad es, en cambio, cuál es la articulación que se ha materializado entre las formas de subordinación que han afectado tradicionalmente al país, y las connotaciones peculiares que el Uruguay ha mostrado desde sus orígenes, pasando revista a todos los aspectos fundamentales que al afectar a esas formas y peculiaridades, han venido moldeando a la articulación aludida, adaptándola a las circunstancias y redefiniendo —cuando resultó necesario— muchas de sus bases principales.

Y adoptar este punto de vista es también esencial para intentar una explicación de los orígenes de la actual crisis económica en el mundo y en el Uruguay. No sólo porque hay importantes lazos de conexión entre ambos procesos. También porque en la interpretación de la situación vigente ahora en el país es preciso definir con precisión las responsabilidades que corresponden a los factores internos y a los externos, aun cuando ello no signifique —en ningún caso— olvidar las relaciones existentes entre los mismos.

Si adoptamos una perspectiva limitada y observamos lo que ha ocurrido en el Uruguay y en el mundo durante el transcurso de los últimos años, tengo que adelantar desde ya algo que después trataré de fundamentar, y es que la primera responsabilidad de la angustiada situación económica que hoy presenta el país debe ser, sin ninguna duda, asignada al modelo neoliberal de política económica que ha estado vigente desde 1974. Naturalmente, cuando afirmo esto no me olvido que la adopción de dicho modelo encontró condiciones propicias en el contexto internacional para materializarse, como veremos después. Ni tampoco dejo de tener en cuenta las dificultades que hoy día experimenta el país como consecuencia directa de la recesión mundial. Simplemente considero dos argumentos que en mi opinión resultan de decisiva importancia a la hora de asignar responsabilidades. El primero es que la vigencia del modelo neoliberal en el Uruguay puede ser visto como un proceso de desprotección creciente de la economía nacional; en otras palabras, se desarmó al país y se lo dejó desguarnecido para enfrentar las consecuencias de una situación como la que hoy vive el mundo. Y si el Uruguay hoy mira hacia el exterior con ansiedad, de modo de percibir cualquier atisbo de recuperación que lo pueda ayudar a salir del pozo, es porque tiene en vigencia una política económica que lo obliga a apostar solamente a esa posible recuperación, que le ha negado al país toda posibilidad de postura nacional al respecto, que afirma permanentemente —a través de sus mentores— que no se puede hacer nada más que esperar que la economía mundial comience a revitalizarse. Entonces, cuando se adopta un modelo económico de esta índole no es posible echarle la culpa de los problemas internos, a la recesión internacional. Precisamente porque se ha elegido una política económica que multiplica los efectos de esta última. Y otro argumento que de ninguna manera se puede olvidar, por más apremiante y absorbente que resulte el panorama actual, es que —en rigor— la desarticulación total en que está sumida la economía uruguaya ahora, empezó a gestarse bastante antes que el mundo entrara en la aguda recesión que lo ha afectado durante 1981 y 1982. Diría incluso que en los años que los pocos defensores del modelo neoliberal que aún quedan consideran como de apogeo de esta política económica —o sea 1979 y 1980— ya se advertían con claridad algunos síntomas de que dicho apogeo resultaría muy fugaz y que, adicionalmente, la economía uruguaya entraría en una fase de deterioro progresivo. En realidad, la posición que quiero defender desde este punto de vista es la de que, aun sin recesión internacional, el modelo neoliberal hubiera llevado al Uruguay —tarde o temprano— a la misma situación en la que se encuentra ahora. En estas circunstancias, dicha recesión ha operado, más que como un origen de la coyuntura que estamos viviendo en el país ahora, como un agravante de las condiciones impuestas por el modelo neoliberal de conducción económica adoptado internamente.

En todo caso, ni la crisis nacional ni la recesión internacional pueden

ser explicadas con rigurosidad si el enfoque de las mismas se restringe a lo que pasó durante los últimos años. Ambas se integran a procesos mucho más largos y complejos que —de acuerdo con lo ya dicho— tienen vinculaciones entre sí. Y no pueden ser encaradas como si lo que ocurrió en los años más recientes fuera meramente una fase de las fluctuaciones que caracterizan a las economías capitalistas. Esta postura resultaría sumamente superficial y ocultaría o tergiversaría la verdadera esencia de esos procesos. Lo que hay que intentar, en cambio, es percibir con una perspectiva histórica de mayor duración, tanto el origen del modelo neoliberal en el Uruguay, cuanto la gestación de esta etapa crítica por la que atraviesa el sistema capitalista internacional, tratando de descubrir las posibles conexiones que puedan existir entre ambas situaciones. Sólo de esta manera podremos entender lo que pasa ahora en el país y evaluar correctamente la incidencia que sobre ello tiene el contexto externo.

Por las razones mencionadas, observemos a continuación cuáles han sido los principales factores que explican a largo plazo la trayectoria del proceso nacional y, luego, los que simultáneamente vinieron gestando una determinada evolución en el sistema capitalista internacional, particularmente el segmento del mismo al cual está integrado el Uruguay. En la consideración conjunta de los mismos encontraremos las condiciones que hicieron posible el advenimiento del modelo neoliberal en el país, que a lo largo de los últimos ocho años condujo a la economía nacional a su estado de prostración actual. Veamos también qué ocurrió en el contexto internacional durante el transcurso de estos últimos años de modo de apreciar cómo se han entrelazado las condiciones internas y externas en esta fase reciente de nuestra historia. Ello nos permitirá fundamentar mejor la afirmación de que la primera responsabilidad de la situación actual debe ser imputada al esquema de política económica que ha estado vigente en el país desde 1974.

2. LA LARGA CRISIS URUGUAYA

Cuando se observa el proceso uruguayo con una perspectiva de largo plazo, se comprueba que el origen de sus problemas económicos más arraigados reside en el estancamiento de la producción.¹ Y ello lo podemos percibir con referencia a los dos grandes sectores de la producción material: el agro y la industria.

La producción agropecuaria del Uruguay se estancó en la década de los años treinta. Desde entonces, su crecimiento ha sido menor al de la población nacional, caracterizada a su vez, por su escasísimo dinamismo.

¹ Véase Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, *El proceso económico del Uruguay*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969.

Hoy día, la producción y las exportaciones agropecuarias por habitante son menores que cincuenta años atrás. Y es oportuno anotar de pasada que el agro no creció ni siquiera durante los años en que la política reciente obtuvo tasas significativas de crecimiento del producto bruto interno. Precisamente, éste es un elemento de juicio importante para evaluar el tipo de crecimiento impulsado por el neoliberalismo en el Uruguay. Desde otro punto de vista, cabe consignar que el estancamiento agrario nacional, que ya cumplió medio siglo, tiene una clara raíz tecnológica: en otras palabras, la producción no creció porque no se renovaron los métodos de trabajo, y ello sucedió porque lo impidieron factores internos y externos interrelacionados entre sí. (Astori, 1979.) Por un lado, el país nunca puso en práctica una política que impulsara racional e integralmente una renovación tecnológica generalizada del sector. Por otro lado, a partir del decenio de los treinta, el mercado internacional de los productos básicos que Uruguay exporta, esto es, carne y lana, vino reestructurándose progresivamente en contra de la participación de países como el nuestro obligándolos cada vez más a abastecer a compradores de segunda línea, a comercializar productos de inferior calidad y, por supuesto, a percibir menores precios.

Luego de consolidado el estancamiento agrario, y habida cuenta de la crisis generalizada que experimentaba el sistema capitalista internacional en los años treinta, el Uruguay —como los demás países latinoamericanos— inició una política de industrialización sustitutiva de importaciones, basada en la puesta en práctica de diversos instrumentos de protección y en el destino de la nueva producción al abastecimiento del mercado interno. Pero en ese mismo planteamiento de la industrialización sustitutiva radicaba el germen de su propio agotamiento. No obstante el rápido crecimiento de la producción industrial nacional durante la década de los cuarenta, el Uruguay nunca logró insertar al sector en el mercado internacional. Y aquí también jugaron condiciones internas y factores externos entremezcladamente. Por un lado, los errores cometidos en materia de protección a las empresas nacionales generaron una ineficiencia notoria en las principales ramas de la producción. Por otra parte, la estructura del mercado mundial de manufacturas segregaba a países subordinados como el Uruguay, a favor del indiscutible poderío en materia tecnológica, de precios y comercialización, de dotación de recursos financieros, de capacidad de movilización y captación de mercados que mostraban las empresas de origen central, consolidaba un creciente monopolio de estas últimas en el intercambio internacional de productos industriales. En estas circunstancias, la interacción entre la dependencia tecnológica del Uruguay, su estrecho mercado interno, la imposibilidad de acceder al mercado internacional y las propias ineficiencias internas —producto de una política de protección que cometió muchos errores— condujeron inexorablemente a la industria hacia el estancamiento. Así, por ejemplo, las técnicas que se veía obligada a emplear la industria uruguaya —diseñadas para realidades distintas y con recursos diferentes—

exigían la adopción de escalas de producción cada vez más amplias. Y la creciente contradicción entre dichas escalas y las reducidas dimensiones del mercado interno ampliaron progresivamente la brecha de la capacidad ociosa de producción, la ineficiencia y —definitivamente— la caída de la rentabilidad. (Millot-Silva, 1973.) Hacia mediados de los años cincuenta, la industria uruguaya dejó de crecer.

Quiere decir que hace algo más de veinticinco años que el aparato de producción material del Uruguay se estancó. Y sobre esta base, comenzaron a multiplicarse rápidamente los problemas económicos del país, a través de crecientes desarticulaciones en el funcionamiento interno y en las relaciones con el exterior. Entre los internos, cabe destacar en particular el desequilibrio fiscal y la expansión de actividades financieras y especulativas, en un rasgo que años más tarde se repetiría con el modelo neoliberal. La rentabilidad que no se podía obtener con la producción se buscaba en el circuito financiero de la economía. Pero cuando ello descansa sobre bases artificiales —como son las constituidas por una producción material que no crece— no puede durar mucho. El límite que separa a la ganancia especulativa de la quiebra de todo el sistema que la genera se aproxima cada vez más. Y eso le pasó al Uruguay. Luego de haber llegado a ser el país con mayor número de agencias bancarias por habitante de América Latina en la primera mitad de la década de los sesenta, sufrió un trauma muy serio en todo su sistema financiero, iniciado con la recordada quiebra del Banco Transatlántico, que arrastró consigo a otras instituciones y sacudió hasta sus raíces al sistema aludido. Pero la rentabilidad que no se podía conseguir con la producción no sólo se buscaba en el circuito financiero interno. También se comenzó a buscar afuera del país. Y por eso, el primer rasgo a destacar desde el punto de vista de las relaciones con el exterior es el que se refiere a la creciente fuga de capitales que comenzó a experimentar el Uruguay a comienzos de los años sesenta. Y junto con la fuga de capitales sobrevino una importante pérdida de reservas y un proceso de incremento continuado del endeudamiento con el exterior.

Quizá la síntesis más clara de las repercusiones internas que generaron los desequilibrios originados por el estancamiento sea el proceso inflacionario que empezó a vivir el país a partir de los últimos años del decenio de los cincuenta. Por un lado, la presión básica para alimentar dicho proceso radicaba en la propia existencia de una producción que no crecía. Adicionalmente, los desajustes crecientes en el funcionamiento interno de la economía y en sus relaciones con el resto del mundo, propagaban y multiplicaban el empuje inflacionario.

En las condiciones descritas, ningún país con instituciones democráticas en vigencia puede evitar la gestación y el crecimiento de una gran crisis social. Y el Uruguay no fue una excepción. A partir de los primeros años sesenta comenzó a crecer un enfrentamiento cada vez más agudo entre los grupos sociales por mantener o acrecentar sus participaciones en un ingreso

que no crecía. Se utilizaron renovados métodos de lucha y la pugna social se convirtió en uno de los más eficaces mecanismos multiplicadores de la inflación, agravando a través de esta incidencia todos los desequilibrios descritos precedentemente.

Y esta crisis generalizada en los ámbitos económico y social condujo, como no podía ser de otra manera, a una crisis en el terreno político. El Uruguay venía enfrentando los crecientes desequilibrios en los ámbitos referidos con su aparato estatal tradicional, apoyado en una tácita alianza de clases —que la realidad cuestionaba día a día— y actuando como árbitro del proceso económico, especialmente en lo que se refiere a la distribución de sus frutos. Precisamente fue por esta razón que, más que combatirla, el Estado usó la inflación para ir tratando de sobrellevar una pugna social que —según dije antes— suponía la presencia de renovados métodos e instrumentos de enfrentamiento y la sucesión de saltos cualitativos en ese proceso de lucha. Pero llegó un momento en que comenzó a no ser posible seguir actuando así. Llegó un momento en el que empezó a percibirse con claridad la contradicción entre la crisis económica y social y el aparato estatal tradicional que el país había venido edificando junto con la conformación de su sistema democrático.² Llegó un momento en que el Uruguay arribó a una encrucijada en la que se le planteaban dos grandes opciones: o la transformación integral de su sociedad, o la transformación del aparato del Estado, de modo de tornarlo funcional a las nuevas condiciones impuestas por la crisis. En esas circunstancias históricas, el país no tenía condiciones para iniciar un proceso de transformación integral de su sociedad. Y el hilo se cortó por lo más delgado: a fines de los años sesenta se comenzó a recorrer un camino de creciente autoritarismo que, en última instancia, significaba la desaparición paulatina del estado tradicional y también del contexto democrático en que aquél estaba inserto. El Uruguay se preparaba para enfrentar la crisis con mano dura.

3. EL SISTEMA CAPITALISTA INTERNACIONAL: ¿FLUCTUACIONES O UNA CRISIS CADA VEZ MÁS PROLONGADA?

Mientras el Uruguay se aproximaba a su encrucijada de fines de la década de los sesenta, ¿qué ocurría en el contexto internacional? La tradicional expansión del sistema capitalista con base en crisis periódicas —que dio origen a muchas teorías sobre las fluctuaciones de dicho sistema— parecía ser sustituida por fases depresivas cada vez más largas y periodos de recuperación cada vez más cortos, en el marco de una tendencia a largo

² Véase Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, *Un reajuste conservador*, Montevideo, Fundación de la Cultura Universitaria, 1973.

plazo que acentuaba una declinación evidente en varios de los planes estratégicos en que se apoya su funcionamiento, como por ejemplo, la tasa de rentabilidad del capital y la gran expansión financiera que comenzó a materializarse a contar de los años cincuenta no es ajena a esa tendencia. El sistema buscó en esa expansión mayores posibilidades de realizar efectivamente su rentabilidad, una movilidad más amplia a lo largo y a lo ancho del mundo, y, sobre todo, una plataforma para facilitar la concentración del capital, rasgo esencial al que ha tendido todo el funcionamiento de esta organización económica desde hace mucho tiempo. Por eso el mundo en general, y Europa en particular, se inundaron de dólares durante los años sesenta. Y por eso, hacia fines de esa década, además de sus problemas de rentabilidad, el sistema tenía también una necesidad creciente de encontrar colocaciones para un volumen cada vez más grande de recursos financieros. A la transnacionalización productiva y tecnológica, se superponía ahora una transnacionalización financiera. Y esta última comenzó a crecer tanto, que empezó no sólo a neutralizar muchas veces las políticas monetarias internas de los países receptores de esos fondos, sino a originar un cuestionamiento cada vez más fuerte del sistema monetario internacional y de las instituciones en que este último se apoyaba.

Quizá la decisión del presidente De Gaulle de presentarse con los dólares que Francia había venido acumulando a demandar el oro correspondiente a la Reserva Federal de Estados Unidos fue la gota que desbordó el vaso. Y el presidente Nixon tuvo que decretar la inconvertibilidad del dólar en oro en 1971. Sin ninguna duda, ello significó la quiebra del sistema monetario internacional —que dicho sea de paso no ha podido ser superada hasta ahora— y la confirmación de que la transnacionalización financiera comenzaba a ser una piedra angular en el funcionamiento del sistema capitalista internacional. Por otra parte, hechos que sobrevendrían algunos años más tarde —principalmente la crisis del petróleo originada en 1973— realimentarían este proceso y convertirían a la circulación de fondos financieros por el mundo en uno de los hechos centrales de las relaciones económicas internacionales.

En estas circunstancias, ¿cuáles son las preocupaciones centrales de los países dominantes y las empresas transnacionales de ese origen a comienzos de la década de los setenta? **Enfrentar la renovada tendencia a la declinación de la rentabilidad y encontrar nuevas áreas para volcar un excedente cada vez mayor de recursos financieros.** Y la estrategia que comienzan a montar para materializar estos objetivos incluye cuatro procesos fundamentales. (Fajnzylber, 1979.) Primero, la reestructuración de actividades productivas a escala mundial, enviando a la periferia aquellas industrias que menor rentabilidad originan y reteniendo las que tienen una mayor potencialidad de generación de ganancias. De esta manera, las primeras aprovechan la presencia de una fuerza de trabajo mucho más barata en los países de menor desarrollo y elevan la tasa media de ganancia de todo el sistema.

Por eso, por ejemplo, en América Latina se comienza a producir un número cada vez mayor de automóviles, en tanto que los centros retienen industrias como la electrónica, cuyas condiciones de rentabilidad no alcanzaron el límite que exige la búsqueda de una compresión salarial. En segundo lugar, y paralelamente a lo anterior, los centros buscan dirigir un volumen creciente de recursos financieros a la periferia, aprovechando una capacidad potencial de endeudamiento que en aquel momento era significativa y procurando colocaciones rentables para dichos recursos. En tercer lugar, y como complemento indispensable de las dos primeras líneas estratégicas mencionadas, los centros comienzan a promover por diversas vías que operan conjunta e interrelacionadamente, la adopción de políticas de apertura de corte neoliberal en los países de la periferia: apertura que no se limita a asegurar la libre circulación del capital productivo y el intercambio comercial, sino que también incluya las necesarias garantías para la libre movilidad de los recursos financieros. Ésta es la condición fundamental para que posibilite, simultáneamente, la reestructuración de las actividades productivas a escala mundial, y la reorientación de los excedentes financieros hacia los países del Tercer Mundo. Y finalmente, en cuarto lugar, los países dominantes comienzan a practicar lo contrario de lo que promueven en la periferia, o sea, un creciente proteccionismo que recurre a los más variados instrumentos para asegurar su efectividad.

Los centros de poder mundial en la estructura capitalista internacional pusieron una acción institucional diversificada al servicio de tal estrategia. Desde la Comisión Trilateral, en la que participan Estados Unidos, los países capitalistas más poderosos de Europa y Japón (Urencia, 1979), hasta la presencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, todos ellos ampliamente dominados por Estados Unidos. El rasgo común y esencial de esta acción institucional ha sido la presión política y económica por las más diversas vías para empujar a la periferia a adaptarse a la estrategia anteriormente expuesta y, particularmente, para obligarla a adoptar las políticas de apertura que harían posible la consecución de los objetivos aludidos en este sentido, las condiciones que han venido imponiendo el Fondo Monetario Internacional o los bancos referidos para asistir a los países de menor desarrollo, constituyen un ejemplo muy ilustrativo acerca de la medida en que los centros han procurado influir en las políticas internas de la periferia. Y la intervención lisa y llana de los países centrales—especialmente Estados Unidos— en asuntos internos de las naciones del Tercer Mundo, es también un claro ejemplo de hasta dónde podía llegar la presión en el terreno político. Por eso es que también los polos de dominio en el sistema capitalista internacional se aprestaban a enfrentar la crisis con mano dura.

4. NEOLIBERALISMO EN EL URUGUAY

Hacia la primera mitad del proceso de los setenta, la interacción entre condiciones internas y externas era propicia para que en el Uruguay se adoptara un modelo neoliberal de política económica. Por un lado, el proceso de creciente autoritarismo iniciado en 1968 y culminado en 1973 preparó el escenario para el advenimiento de un esquema de conducción que en el Uruguay tradicional, con sus instituciones democráticas y su Estado árbitro del proceso social, no hubiera sido posible. Por otro lado, el modelo neoliberal resultaba perfectamente compatible con la estrategia que procuraban imponer los centros en el contexto internacional. De esta manera, quedaba abierto el espacio para comenzar a practicar una política económica que intentaba resolver la crisis interna descargando el peso del reajuste consiguiente sobre los trabajadores, y que al mismo tiempo se alineara en relación a las nuevas tendencias impuestas por los países dominantes, adoptando la apertura pretendida por estos últimos para asegurar una mayor circulación de sus productos y sus recursos financieros. (Astori, 1981.)

Y si se recorren rápidamente los objetivos y los instrumentos utilizados por el modelo neoliberal en el Uruguay, se aprecia con mucha claridad que su adopción no ha significado otra cosa que la vigencia firme de esas condiciones internas y externas. Así se comprueba que el modelo persiguió desde el principio una revitalización de la acumulación capitalista interna, de modo de superar el estancamiento que predominaba desde hacía veinte años; una nueva inserción internacional del Uruguay, incluyendo las áreas real y financiera, y una solución de los desequilibrios internos, especialmente en materia de inflación, déficit fiscal, y relaciones con el exterior. (Notaro, 1980.) Por otra parte, al servicio de estos objetivos puso en primer lugar una aguda compresión salarial, como nunca había conocido antes el país. Una apertura al exterior que incluyó una extraordinariamente liberal ley de inversiones extranjeras, la libre circulación de activos financieros, la puesta en práctica de estímulos a las exportaciones no tradicionales y una reforma arancelaria que supuso la disminución progresiva de restricciones a la importación. Una reconversión industrial que constituyó la contrapartida de los estímulos a las exportaciones no tradicionales. Y cambios muy profundos en el manejo de la política de corto plazo, incluyendo una liberalización generalizada de precios; una reforma fiscal, que supuso el predominio creciente de impuestos regresivos como el IVA; una reforma monetaria y cambiaria que implicó una interrelación progresiva ante ambos ámbitos de la política económica y que, en particular, incluyó la liberalización de la tasa de interés y de las actividades bancarias y financieras en general, así como la fijación preanunciada del tipo de cambio. Fue la fase del modelo iniciada en octubre de 1978 la que, al acentuar nítidamente las características neoliberales y monetaristas de la política económica, adoptó las

medidas mencionadas en los ámbitos monetario y cambiario, al tiempo que profundizaba la liberalización del comercio exterior, disminuyendo el apoyo que hasta entonces habían tenido las exportaciones, así como los aranceles y recargos a las importaciones. En este sentido, está claro a esta altura que fue esa fase la que aceleró lo que inevitablemente habría de ocurrir en materia de resultados del modelo.

Un rápido examen de estos resultados sirve para demostrar claramente que, antes que una consecuencia de la recesión internacional, la crítica situación actual de la economía uruguaya comenzó a gestarse desde el propio advenimiento del modelo neoliberal, y que la pendiente que nos condujo al estado de postración actual se aceleró considerablemente a partir de lo que he llamado antes segunda fase del modelo, que se inició en octubre de 1978. En otras palabras, a la luz de la evolución de largo plazo comentada antes, el esquema vigente de conducción económica no logró, en última instancia, superar los problemas que la economía uruguaya traía desde muy atrás, al tiempo que la sumió en la peor depresión que conoce la historia contemporánea.

Demás está decir a esta altura, que el deterioro salarial en la distribución del ingreso acompañó desde la primera hora la práctica del neoliberalismo en el Uruguay. Ha sido, entonces, una condición de su vigencia y el principal fundamento para calificarlo como un modelo inherentemente injusto. Con base en información de la Dirección General de Estadística y Censos, hoy día, el salario real medio en Uruguay es un 60 por ciento inferior al de 1971. Y junto con esta característica, el modelo también originó la adopción de diversas estrategias de sobrevivencia a nivel familiar, todas indispensables para tratar de paliar el enorme reajuste regresivo en el plano salarial, y todas negativas desde el punto de vista social. Así, además del proceso de emigración, que ya se había iniciado antes de la adopción de esta política económica, se percibió claramente un incremento en el número de horas trabajadas por persona; un aumento de la participación de la fuerza de trabajo secundaria —esto es, mujeres, niños y ancianos— en el mercado laboral, y un crecimiento del número de personas que trabajaban por familia. Seguramente, el aislamiento, la falta de diálogo y la fractura social que predominaron en el Uruguay de los últimos años, no son ajenos a esas consecuencias del modelo.

En materia de producción, el modelo originó un rápido crecimiento de la acumulación de capital y la consecuente expansión del producto bruto interno, a favor de la compresión salarial reseñada precedentemente. Pero visto con la perspectiva del tiempo, ese crecimiento no constituye un salto cualitativo del Uruguay hacia una nueva situación estructural, en la que el dinamismo del aparato productivo hubiera sustituido al estancamiento precedente. Primero porque fue efímero, especialmente en relación con el prolongado proceso de crisis económica nacional. Segundo, porque los mayores guarismos alcanzados— que son los que corresponden al trienio

1978-1980— han estado demasiado asociados a la acción de factores coyunturales, como la construcción de grandes obras de infraestructura, a cuya incidencia la economía uruguaya resulta muy sensible; la demanda agregada de origen argentino en 1979, y un gran empuje en la construcción de viviendas en el país, que como resulta claro, nunca puede ser un factor duradero de crecimiento en un contexto como el uruguayo. Tercero, porque el tipo de crecimiento que impuso el neoliberalismo excluyó a un sector esencial de la economía nacional como es el agro, cuyo estancamiento estructural continuó impertérrito durante estos últimos años.

No obstante el aumento y la importante recomposición que originó en las exportaciones (Sarachaga, 1980), el neoliberalismo no logró consolidar una inserción comercial internacional favorable al país. Por el contrario, el desequilibrio comercial lo acompañó también desde la primera hora, y se profundizó con la acentuación de las connotaciones neoliberales de la política económica a partir de 1978. Así, puede decirse que desde 1974 hasta 1982, no hubo un solo año de superávit comercial, y que en algunos de esos años el déficit alcanzó magnitudes —consideradas relativamente, desde luego— jamás conocidas antes por el país (véase el cuadro 1).

CUADRO 1

DÉFICIT COMERCIAL DEL URUGUAY CON EL EXTERIOR (en millones de dólares)

<i>Años</i>	<i>Déficit</i>
1974	— 104.5
1975	— 172.6
1976	— 40.7
1977	— 122.4
1978	— 88.3
1979	— 442.7
1980	— 668.7
1981	— 383.6
1982	— 87.1

FUENTE: Banco Central de Uruguay.

La jerarquización del aparato financiero y especulativo ha estado en el centro de las consecuencias originadas por el modelo también desde sus comienzos. Y ya que tanto se ha hablado del crecimiento originado por esta política económica, es bueno tener presente que los guarismos más altos que se alcanzan se registraron precisamente en el ritmo de expansión de

las colocaciones bancarias. Y no sólo más altos, sino extraordinariamente superiores a las tasas de expansión del producto. Así, si se considera todo el sistema bancario, las colocaciones expresadas en términos reales crecieron un 30 por ciento en 1974; un 27 por ciento en 1976; un 11 por ciento en 1977; un 18 por ciento en 1978; un 15 por ciento en 1979, y un 30 por ciento en 1980. Si se considera sólo a la banca privada, las tasas de expansión entre 1977 y 1980 alcanzan magnitudes increíblemente altas: 28, 34, 39 y 42 por ciento, respectivamente.³ Por otro lado, el tipo de mecanismo elegido por el modelo neoliberal para equilibrar la balanza de pagos del país también revela esta jerarquización de lo financiero y lo especulativo; habida cuenta del déficit comercial permanente, el modelo apostó todo a la entrada de capital financiero de corto plazo, en favor de una interrelación muy peculiar entre tipo de cambio y tasa de interés. Un tipo de cambio fijado, no en función de las necesidades de la producción, sino de las necesidades del modelo en materia de control de la inflación y de absorción de recursos financieros provenientes del exterior. Una tasa de interés progresivamente creciente, en favor de la transnacionalización financiera en el contexto internacional, y del oligopolio interno constituido por el sistema bancario de Uruguay, cada vez más extranjero como veremos después. En estas circunstancias, toda la ganancia de reservas internacionales que se materializó durante la vigencia de esta política se debió al ingreso de capital especulativo del exterior.

Una contrapartida ineludible de un modelo que jerarquiza la actividad financiera y especulativa en desmedro de la productiva —y que por lo demás se inserta en un contexto donde la circulación de excedentes financieros domina en una gran medida las relaciones internacionales— es el endeudamiento externo del país, así como un relevante incremento de la deuda interna de los agentes económicos con el sistema bancario. Y eso fue lo que ocurrió al Uruguay durante los últimos años. La deuda con el exterior es hoy día siete veces mayor que la de 1973, habiendo llegado a 5 000 millones de dólares en junio de 1984. Y en lo que se refiere a la deuda interna, cabe señalar que los saldos de crédito concedidos por bancos y casas bancarias a las empresas y las familias del país casi llegaron a triplicarse en el muy corto lapso de veintisiete meses; en efecto, entre diciembre de 1979 y marzo de 1982, esos saldos se incrementaron de 13 040 a más de 35 000 millones de nuevos pesos. El endeudamiento interno, entonces superó los 3 100 millones de dólares, y si se tiene en cuenta que todo el producto bruto interno del Uruguay en un año es de aproximadamente 10 000 millones de dólares, se aprecia que dicha deuda alcanza prácticamente la tercera parte de lo que el país produce en un año.⁴

Paralelamente a las tendencias reseñadas, el modelo neoliberal ha su-

³ Con base en información del Banco Central del Uruguay.

⁴ Con base en información del Banco Central del Uruguay.

puesto una notable profundización de la extranjerización de la economía uruguaya. Y el mejor ejemplo que se puede poner para ilustrar esta afirmación es precisamente el que se refiere al sector sobre el que se ha apoyado la puesta en práctica de este esquema de conducción económica, o sea el financiero, y en particular el sistema bancario. Dicho esquema no logró convertir al Uruguay en una plaza atractiva para la transnacionalización productiva, pero sí creó las condiciones para que esa transnacionalización avanzara en las operaciones financieras. Y en la actualidad, de los 22 bancos privados que tiene el Uruguay, 20 son extranjeros, a lo que debe agregarse las 20 casas bancarias totalmente extranjeras que operan en el país. Basta sólo pensar en la notoria influencia que la intermediación financiera ejerce sobre todo el proceso económico —especialmente en circunstancias en que dicha intermediación ha sido jerarquizada por la propia política económica interna— para percibir que la extranjerización de este sector supone, en realidad, una extranjerización de todas las decisiones relevantes en materia económica, afectando la producción, el intercambio externo e interno, y —por supuesto— la distribución del ingreso. Por otra parte, en la medida que todo este proceso ha significado un progresivo endeudamiento del país con el exterior, según se vio antes, ha aumentado también el condicionamiento que el país recibe de parte de sus acreedores. Y, naturalmente, a todo ello debe agregarse las consecuencias directas de una apertura comercial indiscriminada, que aumentó la subordinación del Uruguay con el exterior tanto en materia de colocación de exportaciones como de absorción de importaciones. En uno y otro caso, acumulativamente, se han visto perjudicadas las posibilidades de la producción nacional, incluyendo aquella que el propio modelo neoliberal había estimulado en la primera fase de su aplicación, que se desarrolló entre 1974 y 1978.

Visto desde otro ángulo, todo este proceso no ha significado otra cosa que un incremento sustancial en la vulnerabilidad externa del Uruguay, que hoy día es un país totalmente desguarnecido respecto a las oscilaciones que experimenta la economía interna. Más bien habría que decir que lejos de atenuarlos, la política que se practica internamente multiplica los efectos que vienen del exterior. Y ello resulta especialmente cierto respecto a los procesos vecinos de Argentina y Brasil, que tanta incidencia han tenido siempre —y seguirán teniendo— sobre la economía nacional.

5. LOS ÚLTIMOS AÑOS: SE DESARMA EL MODELO

Lo que se ha venido presenciando durante 1981 y 1982 es la culminación necesaria de un modelo que siempre subordinó la producción al circuito financiero y especulativo. Todo ello agravado por la incidencia de la recesión internacional, y exacerbado por la trampa que el propio

modelo significa en cuanto a impedir todo intento de salida que no suponga un cambio de rumbos en materia de política económica.

Pero antes de referirme a esto, quiero dejar muy claro que las tendencias de destrucción de la economía que culminan en estos dos últimos años ya se venían gestando desde tiempo atrás. Dicho de otro modo, es el propio modelo neoliberal el que las genera. Y quizá la síntesis más acabada e ilustrativa que puedo dar acerca de esta afirmación es la que aparece contenida en el cuadro 2, que nos muestra los activos de los concordatos presentados anualmente y expresados a precios de 1968, es decir, en términos reales. Se puede apreciar allí que el año 1979, o sea el de mayor crecimiento desde que se practica esta política económica, significa un gran salto cualitativo desde este punto de vista: hay prácticamente una triplicación de los activos correspondientes a los concordatos presentados. Lo que quiere decir que paralelamente al propio "apogeo" del estilo de evolución económica impuesto por el neoliberalismo, se venía ya procesando la destrucción de una parte no despreciable del aparato productivo nacional. Obviamente, el mismo cuadro 2 nos permite apreciar que hacia 1981 el crecimiento de los concordatos alcanza guarismos extraordinariamente altos.

CUADRO 2

MONTO DE LOS ACTIVOS EN LOS CONCORDATOS PRESENTADOS
(en miles de nuevos pesos a precios de 1968)

<i>Años</i>	<i>Activos</i>
1981	6 167.4
1974	167.3
1975	223.2
1976	650.4
1977	567.0
1978	645.1
1979	1 970.5
1980	1 776.0

FUENTE: Banco Central del Uruguay.

En estas circunstancias, 1982 se inicia con un proceso de producción en plena contracción. Sabemos ya que, luego de haber decrecido más de uno por ciento en 1981, el producto bruto interno disminuyó en 8.4 por ciento en los seis primeros meses de 1982, en tanto que la caída en el agro fue de 4.8 por ciento, en la industria fue de un 14.5 por ciento y en el

comercio de un 21 por ciento.⁵ Simultáneamente, también se vino apreciando un importante decrecimiento de la inversión, que es la condición fundamental para que la producción crezca. Naturalmente, las consecuencias directas de esta situación se verifican en el mercado laboral, y desde este punto de vista, la principal comprobación es que la tasa de desocupación ha trepado casi hasta el 13 por ciento, según las estadísticas oficiales. Y éste no es un trece por ciento cualquiera. Por más que ya es una cifra tremendamente expresiva en sí misma —que entre otras cosas significa la presencia actual de 90 mil desocupados en Montevideo—, es imprescindible recordar que se trata de un guarismo que se materializa en un país que ha perdido una buena parte de su población activa a través de un gravísimo proceso de emigración, y que paga hoy un salario real medio que resulta un sesenta por ciento inferior al de 1971. Quiere decir que con bastante menos gente que con la que debería tener y con remuneraciones mucho más bajas que las que se pagaban más de diez años atrás, la economía uruguaya es hoy incapaz de mantener fuentes de trabajo para ocupar productivamente a quienes están en condiciones de participar activamente en el mercado laboral. O por lo menos a una proporción relevante de los mismos.

Asociada y simultáneamente a lo anterior, el país profundiza su desequilibrio externo. Desequilibrio comercial y desequilibrio financiero. En el plano financiero, ya es evidente que al país no vienen los flujos de capital especulativo que alimentaron las ganancias de reservas internacionales en años anteriores. Y ello no puede ser imputado a la recesión internacional. Esta última afecta primordialmente al proceso de producción y de intercambio mundiales, pero no a los abultados excedentes financieros que siguen buscando rentabilidad en las colocaciones de tipo especulativo, y que incluso crecen con la depresión. Debe ser imputado, en cambio, a la falta total de credibilidad de una política económica que, al mantenerse impertérrita ante los crecientes problemas del país, multiplica día a día los riesgos que ese tipo de colocaciones financieras toman en cuenta para definir sus decisiones. Y, por supuesto, también debe ser imputado a la situación de nuestros vecinos argentinos, que se explica fundamentalmente por el eficaz trabajo de destrucción llevado a cabo por el neoliberalismo entre 1976 y 1981.

¿Y cuál es el resultado directo de este desequilibrio externo? Como no puede ser de otra manera, un rápido crecimiento de la deuda externa, cuyo nivel actual ya fue reseñado antes, y paralelamente un notable deterioro de las reservas internacionales del Banco Central. Entre junio de 1981 y marzo de 1982, la disponibilidad de fondos de trabajo en divisas de dicha institución pasó de 422 a 177 millones de dólares, y en los primeros seis meses de 1982, la disminución puede ser estimada en unos 500 millones de dólares.⁶

⁵ Son los últimos datos proporcionados al respecto por el Banco Central del Uruguay.

⁶ De acuerdo con información del Banco Central del Uruguay.

Desde el punto de vista fiscal, el déficit ha crecido sin pausas durante 1982. La rigidez de los gastos —lo cual está muy vinculado con su composición— y el deterioro de los ingresos públicos como consecuencia del descenso de la actividad económica interna, son las causas fundamentales del hecho. Pero lo más grave son, también en este caso, las consecuencias. Porque este déficit fiscal uruguayo no sirve para estimular una recuperación económica. Dada la aludida composición de los gastos, y el tipo de equilibrio impuesto por la política neoliberal, es un déficit que alimenta, en última instancia, la conversión de excedentes de moneda nacional en dólares, de modo de asegurar a sus tenedores contra los riesgos de una eventual modificación sorpresiva en la política cambiaria. Y ello es, por supuesto, un mecanismo multiplicador de la pérdida de reservas internacionales que experimenta el Banco Central.

A todo esto ¿qué pasa con el sistema bancario? Por un lado, se vino acumulando una masa extraordinariamente alta de depósitos, que a marzo de 1982 había alcanzado un nivel cercano a los 4 millones de dólares, lo que significa la friolera de un 40 por ciento de lo que el país produce en un año. Y ésta es la contracara de todo lo anterior. Mientras el país está fuertemente endeudado, y tiene a su aparato productivo deteriorado y comprometido financieramente, tiene también un enorme volumen de recursos jugados a la colocación especulativa, que por más rentabilidad que puedan generar para sus titulares, al país no le sirve para nada. Mientras la inversión cae y nadie se atreve a dar un paso adelante en materia productiva, lo único que crece en el Uruguay son los depósitos bancarios. Casi el 60 por ciento de esos depósitos eran en moneda extranjera. Ello significaba la pérdida de reservas del Banco Central y la reducción del dinero en circulación, que se convertía en un obstáculo adicional para la actividad económica interna. Y todo esto, a su vez, empujaba cada vez más para arriba la tasa de interés en moneda nacional, cuyos niveles batieron todos los récord imaginables, transformándose así en una barrera insuperable para cualquier intento de recuperación en la esfera productiva.

Pero estas tendencias no son lo único que hay que destacar en el ámbito bancario. Porque simultáneamente a la situación comentada precedentemente, las carteras de deudas a cobrar por los bancos se vinieron tornando progresivamente más pesadas, esto es, difíciles de liquidar. Y ello es el corolario lógico de un proceso por el cual los bancos vinieron sistemáticamente absorbiendo los frutos de la producción durante varios años, mientras esta última se endeudaba cada vez más y veía crecer su carga financiera mucho más rápidamente que sus posibilidades de rentabilidad. En estas circunstancias, a la sucesión de intentos de refinanciación que nada solucionaron, sigue un proceso por el cual se adquirieron esas carteras pesadas por el Banco Central a cambio de la obtención de líneas de crédito en el exterior para este último. En otras palabras, cuando se vieron en dificultades, los bancos privados recurrieron al Estado para tratar de evitar lo

que podría ser un desastre generalizado del sistema financiero. Y lo hicieron aprovechando la situación de gran apremio que el propio Estado tenía, dada su escasez de reservas internacionales. Con ello, todo el proceso redundó en mayores dificultades financieras para el Estado en general y el Banco Central en particular, y —por supuesto— en un incremento de la subordinación del país al exterior.

En resumidas cuentas, lo que se ha venido viviendo es un proceso acumulativo de desarticulación de toda la economía y —en particular— de agravamiento de las consecuencias impuestas por el tipo de equilibrio que ha puesto el monetarismo neoliberal entre algunas variables claves, como las reservas internacionales, el déficit fiscal, la cantidad de dinero, el tipo de cambio y la tasa de interés. Muchas veces exhibido como un logro a lo largo de los últimos años, ese tipo de equilibrio significa ahora la presencia de una trampa que —al tiempo de empeorar progresivamente la situación económica nacional— constituye un obstáculo infranqueable para intentar cualquier salida que no suponga un cambio total de orientación en el esquema de conducción económica del país. Es por eso por lo que nos deslizamos ahora por una pendiente muy aguda. Al estado de postración en que se encuentra la producción, se superpone una interrelación perversa entre las variables monetarias, financieras y las que corresponden al ámbito de las relaciones con el exterior, que además de deteriorar progresivamente los resultados que se obtienen en esos terrenos, impide la reversión del proceso por el único lado de donde puede venir, o sea, la recuperación del proceso de producción.

6. ¿Y QUÉ ES LO QUE OCURRE EN EL EXTERIOR?

Durante el transcurso de los últimos años, las tendencias que inauguraron una nueva fase en la evolución del capitalismo mundial a fines de los sesenta y principios de la década del setenta, se han agravado considerablemente. Por eso dije al principio que al sistema capitalista internacional se le alargan cada vez más las crisis. Y este agravamiento ha venido no sólo por una exacerbación continua de la transnacionalización y la expansión financiera, sino por las propias políticas internas practicadas por los centros, particularmente aquellos orientados por los esquemas ideológicos más conservadores, como Estados Unidos e Inglaterra.

Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, cuya incidencia notable sobre el funcionamiento de la economía capitalista mundial está demás fundamentar. La política adoptada por el presidente Reagan, basada en el extremismo monetarista de Friedman, ha supuesto una drástica reducción de impuestos a las personas físicas y a las empresas, con el pretendido objetivo de estimular la producción: por eso se la ha llamado “política de la oferta” o “supply-side policy”. Pero al mismo tiempo, los gastos del Estado experi-

mentaron una recomposición fundamental: mientras se redujeron notablemente aquellos de mayor incidencia en el proceso económico, como las obras públicas, las inversiones, los subsidios y los programas de asistencia social, los gastos militares no sólo no disminuyeron sino que se han incrementado considerablemente, pasando —por ejemplo— de 156 mil millones de dólares en 1981 a 190 500 en el ejercicio de 1982.⁷ El resultado conjunto de ambos procesos ha sido el de un déficit fiscal sin precedentes, que al combinarse con una reducción de su financiamiento por parte de la Reserva Federal —hecho asociado por lo demás a la reducción impositiva— originó una creciente presión sobre el mercado de dinero con la consiguiente alza de las tasas de interés. En estas circunstancias, dicha alza —junto a la correspondiente valorización del dólar— redujeron la competitividad de los productos estadounidenses y forzaron la adopción de mayores medidas proteccionistas.

¿Cuáles han sido los efectos más visibles de la política económica de Reagan dentro de los Estados Unidos? Un aumento notable en el costo de las inversiones, en la recesión de la producción y en la desocupación, además de una redistribución regresiva del ingreso. Durante 1982, el 0.8 por ciento de las empresas cayeron en bancarota, lo que significa un aumento de 29 por ciento respecto a 1981. En este contexto, entre un 25 y un 30 por ciento de la capacidad actual de producción en Estados Unidos se encuentra ociosa. Y el desempleo ha crecido de 7 por ciento, que era el guarismo vigente al dejar Carter la presidencia, a la tasa récord de 10 por ciento que es la que se registra en la actualidad. En definitiva, como ha señalado John Kenneth Galbraith, la política de Reagan —disfrazada bajo el eufemismo de estimular a la oferta— sólo ha servido para darle más dinero a los ricos por la vía de la reducción impositiva y comprometer, simultáneamente, las posibilidades de funcionamiento del aparato productivo. (J. Galbraith, s.f.)

Pero dada la enorme incidencia de Estados Unidos en la economía mundial, esos efectos internos se proyectan sobre todo el mundo capitalista. Por otro lado, generando un grave efecto negativo en el área de las transacciones comerciales y —a través de ello— en todo el aparato productivo del capitalismo internacional. Por otro lado, diseminando el empuje al alza de las tasas de interés y la valorización del dólar, lo cual a su vez genera una nueva revitalización de la transnacionalización financiera y del auge especulativo, ahora en un contexto mucho más amplio. De acuerdo con lo visto al principio, este hecho no significa otra cosa que profundizar una tendencia que el sistema capitalista a nivel internacional ya venía experimentando desde mucho antes. La política de Reagan, entonces, comprime los efectos favorables de las relaciones internacionales y crea un campo propicio para que se expandan las consecuencias más negativas.

⁷ Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

¿Cuáles son en este momento, entonces, los rasgos más salientes de la situación económica mundial? Por una parte, las transacciones comerciales estancadas y los procesos productivos en plena contracción. De acuerdo con el GATT (Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio), el comercio mundial en 1981 se estancó en volumen por primera vez desde 1975. Así, luego del descenso de 3 por ciento experimentado en 1975, el intercambio internacional había aumentado en 11 por ciento en 1976, 4 por ciento en 1977, 5.5 por ciento en 1978 y 6 por ciento en 1979. Y por otra parte, superpuesta a este deterioro en el campo real, la expansión financiera y especulativa ha alcanzado niveles asombrosos. Dos tendencias simultáneas y asociadas entre sí deben ser destacadas desde este punto de vista. Una es la gran concentración de las reservas monetarias mundiales en poder de los grandes centros. La otra es la concentración de la deuda externa mundial en el Tercer Mundo. Con referencia a la primera de estas comprobaciones, basta señalar que sólo siete países del mundo tienen en su poder más del 43 por ciento de todas las reservas monetarias mundiales. Esos países son Estados Unidos, Alemania Federal, Japón, Francia, Italia, Suiza y Gran Bretaña. Y estos siete países poseen más reservas monetarias que todo el mundo subdesarrollado entero. Sólo Alemania Federal acapara casi la mitad del total de reservas en poder de los países de menor desarrollo no petroleros. Con respecto al proceso de endeudamiento del Tercer Mundo, corresponde señalar que en 1981 la deuda externa total de los países que lo conforman llegó a la increíble cifra de 475 millones de dólares, la cual —dicho sea de paso— supera en nivel absoluto al total de reservas monetarias mundiales, que en ese mismo año fue calculado en 434 millones de dólares. Alrededor de 300 de aquellos 475 millones de dólares corresponden al endeudamiento de América Latina, y 200 de ese total de 300, constituyen la deuda de sólo tres países de nuestra región: México, Brasil y Argentina.⁸

Fácil es imaginarse qué consecuencias tiene esta situación a la luz del nivel asumido por las tasas de interés. A mediados de 1981, por ejemplo, y empujadas por políticas internas como la de Estados Unidos, las tasas de interés en el mundo capitalista habían registrado niveles como los que muestra el cuadro 3. Ello ha elevado sustancialmente el monto de los servicios de la deuda, se ha convertido en un factor adicional de depresión en los países deudores y —como es fácil comprender— ha acercado peligrosamente al mundo capitalista al límite que lo separa de una quiebra financiera generalizada.

⁸ Datos del Fondo Monetario Internacional. Véase, también, Stephany Griffith-Jones (1980).

CUADRO 3

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN LOS BANCOS COMERCIALES
(en mayo de 1981 [*Primerate en porcentaje*])

<i>Países</i>	<i>Tasas</i>
Estados Unidos	20.0
Gran Bretaña	13.0
Francia	19.15
Alemania	14.50
Holanda	13.50
Italia	23.0
Japón	6.75

FUENTE: *The Economist*, 6-12 de junio de 1981.

7. LOS ÚLTIMOS TIEMPOS: EL ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La observación del proceso económico en los últimos años, así como el estado actual, permite comprobar un permanente entrelazamiento entre las situaciones interna e internacional. Esta última ha incidido en los orígenes del neoliberalismo en el Uruguay, reforzando las condiciones internas pre-existentes para su adopción, y ahora opera como un agravante de los resultados que el propio modelo neoliberal ha generado en el país.

Pero si bien esto es cierto, también es muy cierto —y es preciso reafirmarlo— que la primera responsabilidad de la muy crítica situación económica interna la tiene el esquema de conducción económica que ha estado vigente en el Uruguay durante los últimos años. En primer lugar, porque ha sido dicho esquema el que gestó las tendencias básicas que llevaron nuestra economía a la postración productiva, a la falta de competitividad de nuestros productos, al predominio financiero y especulativo, a la extranjerización y a la vulnerabilidad externa. Todo ello a su vez, al costo de un enorme reajuste social regresivo, en el que a una aguda comprensión salarial se superpusieron efectos muy negativos en el mercado laboral. Y lo más importante de todo es que estas consecuencias ya estaban en embrión —y por lo tanto se veían venir— cuando el modelo estaba en su “apogeo” de crecimiento y abundaban las referencias apologéticas al mismo desde esferas sociales y paraoficiales. Así, en 1979 y 1980 nadie se acordaba en el Uruguay de la recesión internacional, pero entre quienes alababan la política económica nadie reparaba tampoco que dicho crecimiento descansaba sobre bases absolutamente frágiles, que un sector básico como el agro-

pecuario seguía sin crecer nada, que se comenzaba a consolidar un proceso de endeudamiento generalizado, que el incremento notable de los concordatos revelaba que ya comenzaba a fracturarse el aparato productivo. Y naturalmente, tampoco se tenían presentes los muy negativos efectos sociales del modelo. Pero cuando empezó a ocurrir lo que tenía que ocurrir, y las que fueron tendencias embrionarias se manifestaron con claridad, la recesión internacional pasó al centro de la discusión pública, siendo que ella también venía gestándose desde mucho antes. En segundo lugar, no es posible eximir de una responsabilidad primera y central en la explicación de la crítica situación actual de la economía uruguaya a un modelo que significó someter al país al estilo de evolución económica que ha venido imperando recientemente en el mundo, recogiendo todos los efectos negativos de este último y sin beneficiarse con ninguna repercusión favorable. Entonces, si supuestamente la recesión internacional tiene tanta influencia sobre nosotros ello se debe —antes que nada— a que hemos adoptado una política económica que ha permitido y, más que eso, multiplicado dicha influencia. Y en tercer lugar, no es posible olvidar que en el Uruguay ha habido algunas peculiaridades originadas pura y exclusivamente por el neoliberalismo local, que nada tienen que ver con la situación internacional, asumiendo un perfil propio y al mismo tiempo decisivo en la explicación de nuestros problemas actuales. Tal vez la síntesis más clara y acabada de esta afirmación radique en lo que ocurrió con la tasa de interés, variable clave a todas luces en el proceso económico uruguayo, porque a ese nivel se elevó el modelo vigente. En 1982 la tasa de interés internacional llegó al 13 por ciento en dólares. Sin embargo, las tasas activas de interés en moneda nacional en el Uruguay se ubicaban a nivel de entre 60 y 70 por ciento, lo cual, expresado en términos de dólares, significaba una magnitud oscilante entre 30 y 35 por ciento. Esto es, casi se llegaron a triplicar los guarismos internacionales en esta materia. Entonces, por más recuperación internacional que haya, por mayor que sea la incidencia de la situación mundial ¿cómo es posible pensar que en este país se pueda revitalizar la producción con esas tasas de interés? ¿Cómo no percibir que el modelo neoliberal ha generado una situación propia y de su exclusiva responsabilidad en el Uruguay?

Es en este contexto que hay que entender el acuerdo que formalizó el gobierno uruguayo con el Fondo Monetario Internacional en febrero de 1983. Un acuerdo que encierra un significado extraordinariamente grave para el país. Porque lo que el gobierno se comprometió a hacer por encima de cualquier otra cosa fue mantener en vigencia un modelo neoliberal de conducción económica. El mismo que nos llevó a la comprometida situación actual. El mismo que nos obligó a pedir la asistencia del Fondo. O sea que, para tratar de superar la crisis, nos comprometimos a seguir por el mismo camino que terminó en la crisis. Lo que equivale a decir que hemos hecho un acuerdo para no salir realmente de la misma.

El acuerdo reciente con el Fondo es entonces, primero que todo, una renuncia a la búsqueda de soluciones reales para los problemas económicos del país. Y esto me parece lo más grave del asunto por sus efectos inmediatos y mediatos. Pero analicemos el contenido de la carta-intención para comprobar cómo el país se adaptó a las exigencias del Fondo y cómo esta comprobación general que hemos hecho a manera de introducción, se prolonga y se materializa en aspectos específicos de incidencia muy negativa para la nación. Comentemos primero ese contenido y, luego, tratemos de sacar algunas conclusiones referidas a las implicaciones que aquél tiene para el país. Y al hacerlo, tengamos en cuenta que lo que el banquero internacional quiere ahora es que Uruguay pague su deuda. Ya no se trata de buscar nuevas colocaciones. Se trata de asegurar la recuperación de lo prestado. El Uruguay ya se "gastó" como plaza financiera.

La carta-intención publicada por la prensa local en febrero de 1983 contiene el reciente acuerdo realizado entre el Fondo y el gobierno uruguayo. Sé que es un poco difícil realizar la afirmación que haré a continuación, dadas las características fundamentales que tienen todos los convenios entre el Fondo Monetario y nuestros países. Pero a mí me parece que esta carta-intención es la más subordinante de los intereses nacionales de cuantos documentos de este tipo ha firmado el gobierno uruguayo desde que el ministro Juan Eduardo Azzini suscribió el primero en 1960. Naturalmente, el momento actual es por lejos el más crítico del período cubierto por las últimas décadas. Nunca antes el país había practicado una política económica con resultados tan desastrosos. Nunca antes estuvimos tan débiles para una negociación de esta naturaleza.

Esta carta-intención tiene dos grandes partes a las que hay que prestar atención. Por un lado, la interpretación que el gobierno uruguayo hace acerca de la situación económica del país. Por otro, el programa de política económica que se propone como base del acuerdo. Analicemos sucesivamente los dos temas.

a) *Una interpretación peculiar*

No hay sorpresas en la interpretación que el gobierno hace acerca del proceso que nos condujo a la situación actual. Es el mismo discurso que hemos oído tantas veces en los últimos años desde esferas oficiales. Es la misma postura apologética de los momentos en que se crecía. Es la misma actitud superficial que intentó explicar los graves problemas de los últimos años ignorando sus verdaderos orígenes y confundiendo permanentemente causas con consecuencias.

Esta interpretación puede, a su vez, ser subdividida en dos partes. La que se refiere al proceso económico uruguayo percibido con una perspectiva de largo plazo, y la que observa el desarrollo más reciente de dicho proceso.

A largo plazo, el gobierno asigna la principal responsabilidad de los problemas económicos que tiene el país al intervencionismo estatal. Al tiempo de calificarlo como básicamente ineficiente, se atribuye a dicho intervencionismo el haber gastado una asignación de recursos económicos inapropiada para Uruguay, ya que supuso una artificialidad que alejó al país de las posibilidades de ganar especialización y competitividad para sus actividades productivas, constriñendo a estas últimas a operar dentro de los estrechos límites del mercado interno.

Quiero aclarar ante todo que no voy a hacer una defensa indiscriminada del intervencionismo estatal que el Uruguay practicó tradicionalmente respecto a su proceso económico. Más allá de esto, quiero decir también que ese intervencionismo llevó a cometer gruesos errores en el pasado. Pero quiero afirmar también con mucho énfasis, que la aseveración oficial sobre el punto es completamente superficial y, además, profundamente equivocada.

Es superficial porque —ya no sólo el uruguayo— ningún proceso económico puede ser interpretado a largo plazo diciendo que la principal responsabilidad de los problemas surgidos la tiene el intervencionismo estatal. Es necesario antes tener en cuenta aspectos mucho más profundos que este último y, al mismo tiempo, condicionantes del mismo. Es preciso, por ejemplo, considerar con qué tipo de recursos básicos cuenta el país y cuál es su dotación disponible. Es imprescindible tener en cuenta cómo es su inserción internacional, qué relaciones mantiene con las otras naciones componentes de este contexto, cuáles son los mecanismos específicos de esas relaciones que suponen —como en el caso del Uruguay— una participación subordinada en el contexto referido. Si nos hiciéramos todas estas preguntas y las contestáramos, podríamos encontrar una explicación que lo interpretara. Así, antes de decir si la intervención fue buena o mala, estaríamos en condiciones de comprender sus orígenes y sus motivaciones, con lo que —sin ninguna duda— tendríamos mejores elementos de juicio para evaluarla con seriedad.

Pero además de superficial, la afirmación es equivocada. Porque, por encima de los errores que puedan haberse cometido, lo mucho o lo poco que nuestro país llegó a ser en materia económica se lo debe en gran medida a la intervención del Estado. Y cuando digo esto, miro la historia del país en su conjunto, tengo presente en particular que ya en el último cuarto del siglo pasado el Uruguay tenía un estado que ponía en vigencia las primeras leyes de promoción industrial, recojo la acendrada tradición que a partir de entonces se enraizó desde este punto de vista en el proceso económico nacional. Y, naturalmente, observo con particular atención la conducción estatal a contar de los primeros años del presente siglo, posibilitando al país acceder a niveles de evolución económica que hubieran resultado inaccesibles para la solitaria acción de los agentes privados de este pequeño y frágil Uruguay. Y, por supuesto, tengo para mí los indiscu-

tibles avances que esta misma evolución permitió materializar en el ámbito social propiamente dicho, con una distribución del ingreso y condiciones de vida por cierto muy superiores a las que generaron los detractores del intervencionismo estatal. La "Suiza de América" era un mito, y por suerte ese mito ya está destruido. Los neoliberales se encargaron de darle el golpe mortal, aunque ciertamente sin querer. Pero ¿por qué surgió el mito? Porque, como siempre ocurre, algo de cierto había en el asunto. Y ese algo, distorsionado en la definición del mito, había sido logrado indudablemente por la relevancia que tuvo la intervención estatal. Entonces, si una interpretación sobre la problemática económica del país a largo plazo ignora esta connotación central de nuestra historia, como ahora lo hace el gobierno en la carta-intención, está simplemente equivocada. Y no pueden caber dudas de que el gobierno se equivoca. Porque la alternativa que levanta frente a una intervención que considera errónea, es el neoliberalismo. De esta manera, el gobierno no está haciendo una crítica al tipo de intervención practicada ni a su orientación especificada en la práctica. Está en realidad criticando la idea misma de intervenir. Por eso es que no propone un cambio en la orientación de la intervención, sino que postula la necesidad de no hacerlo. Y éste es un error fundamental a la luz de nuestra propia historia.

Podríamos emplear los mismos adjetivos para calificar la interpretación oficial sobre la situación económica más reciente, es decir la que se conformó en los últimos años, agudizando extraordinariamente la crisis interna y conduciendo a la negociación con el Fondo de la que esta interpretación forma parte. Los adjetivos son superficiales y equivocados, y aquí los vamos a aplicar nuevamente. Sin embargo, vamos a precisar, además, otro: indignante. Porque entre las causas de la crisis más reciente, el gobierno asigna prioridad a los salarios, el déficit fiscal y la pérdida de confianza.

Aunque parezca mentira, la interpretación oficial acerca de nuestra situación económica entiende que la evolución de los salarios contribuyó a provocar la situación que hoy vivimos. Y parece mentira porque se trata del mismo gobierno que puso en práctica un modelo económico que precisamente se basó en la compresión salarial. (Astori, 1981.) Compresión que no fue un costo social indeseado, como muchas veces se la quiso presentar, afirmando que —a la larga— la propia dinámica de la economía la superaría. Por el contrario, ha sido un rasgo inherente del modelo. No hay neoliberalismo sin compresión salarial. Por eso es que desde fines de 1971 hasta ahora el salario real de los trabajadores se ha reducido a alrededor de la mitad. Y por eso es que ver esta afirmación ahora en la carta-intención provoca indignación. Por otra parte, más allá de eso, hay también una confirmación muy importante en esta interpretación tan *sui generis* de nuestros problemas económicos. Y es la de que este modelo reconoce explícitamente que sus únicas posibilidades de ajuste ante momentos de crisis radican en la rebaja de los salarios. Cuando se adoptó esta política

económica para responder a un largo proceso de deterioro que condujo incluso a una quiebra institucional, la base fundamental de la propuesta estaba constituida por esa compresión salarial. Y ahora, ante la profunda penuria económica provocada por la aplicación de esta misma propuesta, la defensa que se intenta consiste en una profundización de esa compresión.

Es que este modelo económico, así como el contexto político que lo hizo posible y que resulta coherente con el mismo, son incapaces de proponer otra salida. Una salida que, por ejemplo, supusiera la participación de todos no sólo en la concepción de soluciones, sino también en la absorción de la importante carga que habrá que soportar para superar la situación. Para el neoliberalismo sólo hay una forma de salir: disminuir los ingresos de los trabajadores. Y esto es lo que se reconoce ahora explícitamente en la carta-intención: tanto en la interpretación que estamos comentando, cuanto en la política que se propone para el futuro a cambio del apoyo del Fondo. En todo caso, es importante que todos tengamos en cuenta que la "solución", de hecho, ya se comenzó a aplicar en 1982, cuando los problemas generados por este esquema de conducción económica habían adquirido su manifestación total.

Pero las radicales discrepancias que tengo con esta manera de enfocar e interpretar nuestra situación económica de corto plazo van más allá del problema de los salarios, aun reconociendo que este último es el más importante. Porque, como señalé antes, el gobierno también piensa que esa situación deriva de la pérdida de confianza y el déficit fiscal. Y aquí tenemos nuevos ejemplos muy claros de algo que ya adelanté: el carácter superficial y distorsionante de esta interpretación, asociado a esa permanente tendencia oficial a confundir causas con consecuencias. Porque la pérdida de confianza y el déficit fiscal —aspectos, por otra parte, muy relacionados entre sí— jamás pueden ser definidos como causas de una situación económica. Ni aquí ni en ningún lado. Son siempre consecuencias de factores más profundos que es preciso identificar y que, al ser analizados como corresponde, pueden —ellos sí— conducir a descubrir las causas que los provocaron. Pero si se afirma que la pérdida de confianza y el déficit fiscal —típicos síntomas o consecuencias de algo que anda mal y que está subyacente— asumen la categoría de factores causales, se está renunciando deliberadamente a descubrir los verdaderos orígenes del asunto.

Todos sabemos que la pérdida de confianza, o la falta de credibilidad como frecuentemente se ha dicho, ha sido una de las connotaciones fundamentales del proceso económico uruguayo en los últimos años. Todos sabemos que hace ya tiempo que nadie cree en esta política económica. Y que desde hace tiempo hay indicios muy claros acerca de la intensidad creciente que ha tenido esa pérdida de confianza, como por ejemplo las compras de dólares y la declinación en las reservas del Banco Central. Todos sabemos también que este modelo neoliberal gestó una situación muy peculiar, inédita en la historia del país: que todo el mundo esté en contra de esa po-

lítica económica, y que el aislamiento social de esta última sea mayúsculo. Que no sólo los trabajadores, perjudicados desde el primer día, la cuestionen integralmente. Que también lo hagan los empresarios, y —lo que es más significativo— de todos los sectores de la producción. Pero ante esta situación, lo que hay que hacer no es afirmar que esa falta de credibilidad tiene una incidencia negativa en la actividad económica. Hay que preguntarse por qué hay pérdida de confianza. Hay que preguntarse por qué nadie cree. Hay que preguntarse por qué grupos sociales con intereses completamente distintos tienen la coincidencia fundamental de rechazar esta manera de encarar la conducción económica del país. Y si nos hacemos esta pregunta y la tratamos de contestar seriamente, seguro que vamos a llegar a las verdaderas causas, que no son otras que los propios resultados que produjo este modelo en el que ya no se cree. En pocas palabras, las causas radican en el mismo modelo, en la propuesta que encierra, en el camino que le impuso el país. Si se perdió la confianza es porque ya desde hace tiempo se empezó a prever lo que ocurrirá. Incluso en la época en que la soberbia oficial, asentada en un crecimiento que no podía durar y prolongada en una apolo-gía del modelo, trataba de hacernos creer que todo iba bien.

Y en cuanto al déficit fiscal ocurre lo mismo. Nadie puede negar que es un aspecto muy importante de la problemática económica nacional actual. Ni que ha llegado a una magnitud nunca registrada desde que en el país se llevan estadísticas al respecto: así, durante 1982, ese déficit alcanzó a representar la tercera parte del total de gastos y casi el 10 por ciento del producto bruto interno del país.⁹ Pero de ahí a afirmar que ésta es una causa de nuestras dificultades actuales media un abismo. Porque el déficit fiscal es también una consecuencia del deterioro a que nos ha llevado el neoliberalismo. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué hay déficit. Por qué los gastos del gobierno llegaron a un nivel tan superior al de sus ingresos. Por qué, en particular, los gastos aumentaron tanto: cuáles son las rigideces que, en medio de una penuria financiera generalizada, determinaron que esos gastos se siguieran realizando. Pero, mucho más importante que eso, hay que explicar en qué se gastó, porque es a todas luces evidente que ese gasto no sirvió para paliar la crisis ni para impulsar una reactivación. Ello quiere decir que la mayor parte de ese gasto es improductivo. Yo quiero aclarar respecto a este punto que estoy firmemente convencido que como parte de una nueva política económica que el país habrá de practicar cuando tenga un gobierno democrático y cuya finalidad más inmediata será la de salir de este pozo en que ahora nos encontramos, el gasto público tendrá que alcanzar niveles muy altos, y probablemente superiores a los actuales. La gran diferencia respecto a la situación actual tendrá que estar en la composición de ese gasto, que deberá mostrar un incremento sustancial en la participación de aquellos

⁹ Datos del Banco Central del Uruguay.

rubros directamente conectados con la reactivación económica. Y en cuanto a los ingresos, lo que hay que explicar es por qué cayeron tanto: si intentamos una explicación objetiva de este hecho, llegaremos sin duda a encontrar vinculaciones muy estrechas entre esa caída y la propia situación de la crisis, comprobando nuevamente que estamos ante consecuencias y no causas como señala el gobierno. Es evidente que la recesión lleva a producir menos, que esto último conduce a una disminución de las ventas y que todo ello provoca un deterioro en la recaudación de impuestos. Sobre todo si se piensa que la principal fuente de ingresos del gobierno, que es el impuesto al valor agregado, depende esencialmente del nivel de actividad.

En síntesis, es una interpretación peculiar la del gobierno en la carta-intención. Peculiar por sus errores, por su superficialidad, por la ignorancia de las verdaderas causas. Coherente con el discurso oficial de los últimos años y la acción política derivada del mismo. Coherente también con la postura del organismo ante quien se presenta dicha interpretación para solicitar su apoyo.

b) *El programa que ofrece el Uruguay*

Como es lógico, tampoco hay sorpresas en el programa que el Uruguay le ofreció al Fondo Monetario Internacional, esto es, los compromisos de política económica que asumió el gobierno ante dicha institución. Primero, porque se trata de un programa coherente con la interpretación que acabamos de comentar y con el esquema de conducción económica que ha estado vigente en el país durante los últimos años. En pocas palabras, se trata de un programa neoliberal. Segundo, porque el compromiso asumido no es otra cosa que una aceptación de las condiciones que impone el Fondo a todos nuestros países, y que conforman también un modelo neoliberal de política económica. De esta manera, el gobierno uruguayo se comprometió a seguir por el mismo camino que nos condujo a esta situación. Los enormes apremios económicos lo llevaron a recurrir al Fondo, y ante esta situación, se aceptaron exigencias que multiplicaron dichos apremios.

Los tres pilares sobre los que descansa este programa derivan directamente de lo que antes vimos como interpretación oficial acerca de nuestra situación económica a corto plazo. En términos simples, se trata de comprimir los salarios aún más, tratar de equilibrar el presupuesto del gobierno y controlar la oferta monetaria.

La compresión salarial propuesta es la misma que ya se había institucionalizado con las medidas del 25 de noviembre de 1982, al haber dispuesto un 15 por ciento de aumento sobre las remuneraciones nominales a partir del 1 de enero de 1983, así como sobre el nivel de las pasividades en el mismo año, y al haber anunciado la liberalización de los salarios privados

y el condicionamiento de los públicos a las disponibilidades de la Tesorería. En pocas palabras, estas medidas suponen el establecimiento de una rebaja del salario real, ya que es evidente que los aumentos dispuestos son inferiores al ritmo de la inflación, que la liberalización aludida encuentra a los trabajadores sin posibilidades de defender su salario y que la Tesorería tendrá por bastante tiempo una penuria financiera suficiente como para que estos seamos seguros desde ya que no se pueden esperar incrementos significativos en los ingresos de los funcionarios públicos. Especialmente si se piensa que otro de los compromisos fundamentales asumidos por el gobierno consiste en tratar de lograr a toda costa y lo antes que se pueda el equilibrio fiscal.

El logro de este equilibrio también se propone a partir del camino iniciado con las medidas del 25 de noviembre de 1982. Desde el punto de vista de los gastos, y además de la compresión de los salarios y las pasividades ya señalada, se postula la eliminación de los reingresos a las exportaciones y la prefinanciación de estas últimas, así como una reducción de los gastos de inversión. Con respecto a los ingresos, se incluye el establecimiento de un impuesto a las exportaciones tradicionales, la incorporación de ajustes e incrementos en los impuestos a la renta y al patrimonio, la extensión y el aumento del IVA —llevándolo del 8 al 12 por ciento en su magnitud mínima— un ajuste de las tarifas públicas oscilante entre 25 y 50 por ciento, y el mantenimiento del impuesto de 2 por ciento a los salarios. Obviamente, muchas de estas medidas agravan los efectos de la compresión salarial para la mayoría de la población del país.

El control de la oferta monetaria también fue introducido por las medidas del 25 de noviembre de 1982, y es aquí donde radica el matiz de diferencia entre la situación actual y la imperante antes de dichas medidas. Porque hasta esa fecha coexistía la fijación preanunciada del tipo de cambio, con una liberación total de dicha oferta. Y con las medidas aludidas, que supusieron el abandono de esa fijación y la flotación del peso, se comenzó a intentar incidir sobre el tipo de cambio a través del retroceso de la creación de dinero, basada —a su vez— en el establecimiento de encajes bancarios considerables y la realización de operaciones de mercado abierto por parte del Banco Central. Los encajes son para restringir las posibilidades de los bancos de prestar y —a través de ello— para limitar la liquidez de la economía, con lo que, supuestamente, se evitan presiones indeseables sobre el dólar y al mismo tiempo se atenúan las presiones inflacionarias. Las operaciones de mercado abierto, que consisten en la compra o venta de títulos, letras y otros valores por parte del Banco Central según lo entienda conveniente de acuerdo con la situación de la plaza, están previstas para reforzar el control de la oferta monetaria. Seguramente se está pensando en la circunstancia concreta de la venta para retirar dinero de circulación.

Y junto a estas medidas centrales, el gobierno se compromete también a profundizar la rebaja arancelaria, a seguir asegurando la libertad de impor-

taciones y a no hacer acuerdos bilaterales de pago. En una palabra, a seguir por la misma ruta al tiempo que se satisfacen las exigencias del Fondo.

Ahora bien: ¿qué es lo que se busca con este programa? El gobierno declara en la carta-intención perseguir el mejoramiento de la situación de la balanza de pagos, la reactivación del empleo y la producción, y el retorno a la estabilidad de precios. Sin embargo, más allá de las declaraciones y los eufemismos, el análisis del programa revela que lo que se procura es, sobre la base del sacrificio de los trabajadores, transferir ingresos a los exportadores, al Estado y al sistema financiero para obtener los recursos necesarios que permitan un relativo desahogo y, en particular, el pago de las deudas contraídas.

Pero toda la experiencia neoliberal que ya hemos vivido a través de los últimos años nos indica que insistiendo por este camino no sólo seguirán agravándose las condiciones de vida de la mayoría de la población, sino que las finalidades señaladas antes no serán alcanzadas. Me baso en tres razones para hacer esta afirmación. La primera es que a pesar de sostener que se busca la reactivación, este programa la compromete seriamente. Por un lado, no contiene en absoluto un esquema coherente y viable de apoyo a la producción, que es lo que hay que incrementar urgentemente si realmente se quiere que haya reactivación. El programa presentado al Fondo, vuelve a ser —una vez más— una elaboración monetarista, en la que la generación material de riqueza no figura como protagonista, y en la que se postula que esa generación puede ser sólo regulada a través de la acción en los ámbitos monetario, cambiario y fiscal. Pero además de todo esto, el programa del gobierno compromete la reactivación porque no incluye ninguna medida para influir sobre lo que hoy por hoy es el principal obstáculo a esa reactivación: la tasa de interés. Con el nivel que tiene esta última, ninguna actividad honesta puede prosperar, ni mucho menos recuperarse de una mala situación, especialmente si se tiene en cuenta que esa situación seguramente implica venir arrastrando un alto endeudamiento desde tiempo atrás. Y el gobierno ahora no muestra la más mínima intención de hacer algo para lograr que la tasa de interés baje. Es más: yo diría que el camino iniciado el 25 de noviembre de 1982 y consagrado en la carta-intención, significa introducir nuevas presiones alcistas sobre dicha tasa. Porque restringir la oferta de dinero y aumentar la iliquidez, como vimos antes, conducirá a un mayor costo de ese dinero. Simultáneamente, para desestimular la compra de dólares, los bancos tienen que subir las tasas que pagan a los ahorristas de modo de lograr que estos últimos prefieran las colocaciones en moneda nacional.

La segunda razón por la que creo que las finalidades que busca el gobierno no podrán ser materializadas, se refiere al hecho de que con este programa se sigue ahondando notablemente la subordinación del país, y con ello, se siguen limitando sus posibilidades de concebir soberanamente la conducción de la economía. Con lo que, en rigor, las posibilidades de

recuperación se dejan dependiendo totalmente del exterior. Y desde ya conviene tener claro que el deterioro actual de la economía uruguaya es tan grande que jamás podrá ser superado solamente con base en una reactivación de la economía mundial. Si el propio país no pone una política especialmente concebida al servicio de esa recuperación, no habrá verdadera salida de esta situación. A nadie que lea la carta-intención le pueden caber dudas de la profundidad que asume aquí la subordinación del país. No sólo por los compromisos expresos de no intervenir en áreas vitales para sacar al país adelante, como el mercado cambiario, el sistema bancario, los convenios internacionales. También porque nunca antes en la historia del Uruguay se habían facilitado tanto las cosas al dominio del exterior, ejercido en este caso por el Fondo Monetario Internacional. Quizá este párrafo final de la carta, que transcribo a continuación, sea más elocuente que cualquier afirmación o comentario que yo pueda formular al respecto.

El gobierno de Uruguay cree que las políticas que se describen en esta carta son adecuadas para el logro de los objetivos de su programa, pero está dispuesto a tomar cualquier otra medida que pueda requerirse a estos fines. Durante el período del acuerdo stand-by, el Gobierno de Uruguay consultará con el Fondo sobre la adopción de cualquier medida que pueda ser apropiada, ya sea por su propia iniciativa o cuando a la luz de los acontecimientos, dichas consultas sean consideradas deseables por el Director Gerente. Nuestra preferencia sería por consultas informales cada tres meses durante el período del acuerdo...

Y la tercera razón en que me baso para sostener que las finalidades buscadas no habrán de concretarse se refiere a la propia severidad de los compromisos que ha asumido el gobierno. Como por ejemplo el de lograr una inflación de 40 por ciento en el año de 1983, cuando en el primer cuatrimestre ya se llegó al 25 por ciento. O el de lograr un déficit de 100 millones de dólares en la balanza de pagos al cabo del año 1983 y el equilibrio de la misma al finalizar 1984. O el de reducir el déficit fiscal a un 2 por ciento del producto bruto interno en 1983 y a 0.75 por ciento de este último en 1984. Es que estas metas exigen, precisamente, una política económica totalmente distinta a la que se practica. Una política que al fortalecer la presencia del Estado en la conducción de la economía, le permita asegurar por diversas vías que dichas metas serán alcanzadas. Y los compromisos asumidos con el Fondo suponen exactamente lo contrario: debilitan aún más esa presencia, incrementando la vulnerabilidad de nuestra economía.

BIBLIOGRAFÍA

- Astori, Danilo: (1981); *Tendencias recientes de la economía uruguaya*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria.
- Astori, Danilo y colaboradores: (1979), *La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya 1930-1977*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
- Fajnzylber, Fernando: (1979), "Sobre la reestructuración del capitalismo y sus repercusiones en la América Latina", en *El Trimestre Económico*, vol. XLVI, México, abril.
- Galbraith, John K. (s.f.), datos proporcionados al semanario *Der Spiegel*, Hamburgo, Alemania Federal.
- Griffith-Jones, Stephany: (1980), "El financiamiento del déficit del Tercer Mundo en los años ochenta", en *Comercio Exterior*, vol. 30, núm. 10, México, octubre.
- Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: (1969), *El proceso económico del Uruguay*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria.
- Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: (1973), *Un reajuste conservador*, Montevideo, Fundación de la Cultura Universitaria.
- Millot, J., C. Silva y L. Silva: (1973), *El desarrollo industrial del Uruguay*, Montevideo, Universidad de la República.
- Notaro, Jorge: (1980), *Estado y Economía en el Uruguay: hipótesis sobre sus interrelaciones actuales*, Montevideo, CIEDUR.
- Sarachaga, Darío: (1980), *Consideraciones sobre la apertura externa*, Montevideo, CIEDUR.
- Urencio, Claudio: (1979), "La estrategia y los países en desarrollo", en *Comercio Exterior*, vol. 29, núm. 11, México, noviembre.